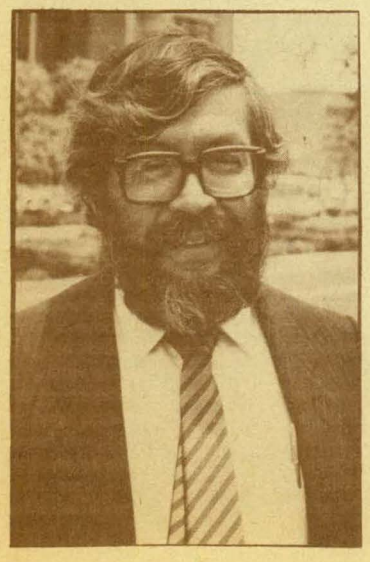
Un terremoto

De Cinco Meses

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA



El terremoto del 19 de septiembre, y el que completó sus estragos al día siguiente duraron unos cuantos minutos. Pero para los damnificados las consecuencias se han prolongado de manera insoportable. Cinco meses después de la tragedia, su situación es peor que en los primeros días.

Entonces se volcó sobre ellos la atención pública, ya del gobierno y aun la internacional, bien a través de los medios, bien a través de la ayuda que fluyó inmediatamente. Vivimos por aquel tiempo días de dolor y espanto, pero también de confortamiento ante el espectáculo de la energía social lanzada a remodelar, sobre nuevas bases, el entorno vital de quienes perdieron vidas y bienes, y su tranquilidad. Veinte semanas después, el panorama es por desgracia distinto.

Decenas de miles de personas están pasando el invierno en la calle, dentro de tiendas de campaña. La etapa más cruda de esa temporada, incluidas las peligrosas inversiones térmicas de las que ahora fuimos conscientes, ya pasó, y gracias a la capacidad de resistencia con que la vida ha acondicionado a la gente común de este país la mortandad no alcanzó las proporciones que pudo haber provocado. Pero estamos ahora en la época de las tolvaneras y "al socaire del febrerillo loco", como escribió Roberto el Diablo, y en el marzo que no es menos veleidoso en cuanto al clima; y sus perniciosas consecuencias encontrarán vulnerables a los damnificados que hace cinco meses tienen la calle por domicilio. Los que residen en albergues no están mejor, infortunadamente. La bien organizada atención del público y de las autoridades en las primeras semanas ha decaído, y a las insuficiencias siguientes se agregan hoy males derivados de la convivencia forzada, de la ruptura de la privacidad, de la certidumbre de que las condiciones en que habitan pueden prolongarse indefinidamente.

Las diversas ayudas que desde fuera y aquí dentro se reunieron para hacer soportable la situación de los afectados por los terremotos no han podido ser canalizadas adecuadamente. Los bienes de consumo se agotaron hace mucho tiempo, y ahora en casi todos los campamentos y los albergues son los propios damnificados los que se han organizado para proveer a su subsistencia y a enfrentar los difíciles términos en que se desenvuelve su vida.

En el ambiente internacional, se mantiene viva la preocupación de gobiernos y organizaciones sobre nuestra suerte. Si bien la desgracia vivida por Colombia poco después de la nuestra con la tragedia de Armero y sus inmediaciones obligó a dirigir allí también el esfuerzo internacional para hacer frente a la emergencia, no hemos padecido por falta de solidaridad foránea. La semana pasada, al cobijo de la ONU, la segunda reunión internacional relativa a la ayuda para México encontró satisfactorios los resultados ofrecidos por el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, y fue escenario para una exhortación a no cesar los auxilios, emitida por el secretario general de las Naciones Unidas. Pero es evidente que la afluencia de esa ayuda hacia los necesitados no se refleja cabalmente en la satisfacción de sus carencias.

La vivienda es la principal de ellas. Y en tal aspecto sólo parece haber confusión. El asunto empezó mal, con las correcciones al decreto de expropiación, la única medida verdaderamente de fondo que se mostró capaz de asumir el gobierno en esta y en otras coyunturas. De más de cinco mil predios afectados, la cifra se redujo a menos de cuatro mil. Verdad es que por el apresuramiento con que debió procederse el decreto inicial apareció plagado de errores técnicos, que hicieron recaer la expropiación sobre predios que no podían ser destinados a propósitos de vivienda popular. Pero también es cierto que en cientos de casos se dio marcha atrás para proteger intereses particulares, siempre deleznables cuando se oponen a los generales, pero especialmente en este caso, pues se hicieron antagónicos de necesidades que era verdaderamente imprescindible atender.

Luego, se organizó un programa de renovación habitacional popular que ha dado magros resultados. Tanto es así, que el lunes pasado, 17 de febrero, su titular, el arquitecto José Parcero López debe haber comparecido ante la comisión pluripartidista que organizó la Cámara de Diputados para ocuparse de las consecuencias del terremoto. No ha sido especialmente acuciosa esta comisión en el cumplimiento de sus deberes, por lo que se colige que si experimentó la necesidad de llamar a capítulo al responsable de programar la vivienda para los damnificados, es porque el clamor general a ese respecto ha crecido al punto de no poder ponerle oídos sordos.

Seguramente los diputados de la comisión interrogaron al arquitecto Parcero sobre los mecanismos de entrega de los certificados que darán derecho a obtener habitación. Está corriendo la especie de que se está traficando con tales certificados. No sería extraño que así ocurriera, aunque habría que calificar de monstruosa la corrupción que de tal modo se practicara, por las circunstancias en que tiene lugar y las personas a las que afecta. Hay que comprender, sin embargo, que la lentitud desesperante con que se están entregando los certificados (que apenas confieren el derecho de esperar, quién sabe por cuánto tiempo, un techo bajo el cual empezar a olvidar la tragedia, hoy vivida en carne abierta) deriva no sólo de la ineptitud con que acciones de este género son emprendidas, sino también por las precauciones que deben ser adoptadas y por la dificultad de acreditar las condiciones requeridas. En efecto, ejerciendo la triste picaresca de quienes no conocen ningún escrúpulo para sobrevivir, hay damnificados a los que podría tildarse de falsos porque lo son no de un terremoto sino de una estructura y de un sistema de relaciones sociales caracterizado por la injusticia. Muchos pobres cuya casa no cayó por el temblor, acaso porque ni casa tendrían, se han adosado a campamentos de afectados del 19 de septiembre con la esperanza de contar también con una habitación. No es posible atenderlos junto con los verdaderos, y por eso se impone una cuidadosa revisión de las circunstancias de cada quien, que difícilmente se pueden acreditar, porque casos hubo en que el terremoto arrasó con todo.

Ante complicaciones así, no será extraño que haya quienes en el programa de habitación quieran aprovechar las circunstancias en su beneficio. Ha de practicarse, tanto a través de la comisión de diputados como de los mecanismos de contraloría aplicables, una rigurosa investigación. Ha de impedirse a toda costa que la corrupción afecte aún más a los damnificados. Ya sufrieron, más que nadie, las consecuencias de los sismos, y desde entonces padecen demagogia, inclemencias climáticas, burocracias autoritarias, desinformación y manipulaciones variadas, agregadas a sus necesidades materiales, como para que todavía hinquen en ellos sus dientes feroces los mordelones.

26/II/86